

por la Guardia Civil en la que están involucrados pesos pesados socialistas han disparado las inquietudes sobre la continuidad del Gobierno. Las cifras presupuestarias, además, juegan en contra.

El déficit público ronda el 3% del PIB, el tope máximo que permiten las reglas fiscales europeas, y el margen para aumentarlo es escaso, aunque aumente la recaudación. Los números rojos de otros aliados, como Francia, casi duplica el saldo negativo de España. Más preocupante aún es la deuda, que ha ido engordando tras los sucesivos shocks que han sacudido la economía global en lo que va de siglo, con la crisis financiera y la pandemia como principales responsables de los repuntes. La tasa de deuda de España rebasa el 100% del PIB, una barrera que también superan Grecia, Italia, Francia y Bélgica en Europa, así como EE UU.

Bruselas, consciente de que durante décadas ha delegado a Washington su estrategia militar y con un conflicto a sus puertas, sigue debatiendo sobre cómo elevar la inversión de defensa sin mermar la estabilidad de las finanzas públicas. Varios socios rechazan la opción de la deuda común y, de momento, el Ejecutivo comunitario solo ha dado luz verde a que los Estados miembros activen una cláusula de escape que les exima de contabilizar a efectos de deuda y déficit el incremento de la inversión en defensa. La salvaguarda, sin embargo, no disipa el riesgo. "La UE hace trampas cuando dice que el gasto para inversiones en de-

fensa no computará, porque se tendrá que pagar igual. Y eso reducirá los recursos para otras políticas", alerta Pere Ortega, fundador y presidente honorario del Centro Delàs de Estudios por la Paz.

La ejecución se presenta como otro talón de Aquiles. Isabel González, socia responsable de Seguridad y Defensa en Sector Público de la consultora EY, asegura que la industria de defensa española es sólida y competitiva, pero reconoce que "la aceleración reciente del gasto plantea desafíos importantes para un tejido industrial caracterizado por ciclos de activación largos y tiempos de respuesta moderados". En otras palabras: un incremento de la inversión tan rápido e ingente necesita tiempo para ser digerido.

El sector está fragmentado tanto a nivel nacional –unas 400 empresas, la mayoría pymes– como europeo, con muchos campeones nacionales que se solapan entre ellos. El mercado comunitario cuenta con más de 70 sistemas de armas distintos, comparado con los cerca de 30 de EE UU, y un déficit de unos 25.000 millones al año en duplicidad de capacidades, según la Agencia de Defensa Europea. Esta falta de economías de escala reduce el efecto multiplicador que la inversión militar podría generar sobre el PIB real en el corto plazo, y tampoco contribuye a mejorar la autonomía estratégica. "Obligaría a importar los suministros de los que no se dispone, básicamente de EE UU", alerta Torres.

"Es peligroso aumentar tanto y tan rápido la inversión en defensa y seguridad, porque las empresas no tienen capacidad para absorberlo", coincide Antonio Fonfría, profesor de Economía en la Universidad Complutense y académico en la Academia de la Ciencia y las Artes Militares, sobre las subidas millonarias acometidas en el último año.

Daniel Fuentes, profesor en la Universidad de Alcalá, recuerda que existe un debate contable sobre lo que la OTAN considera inversión en defensa y lo que no, que los gobiernos podrían aprovechar. "Parte de la discusión tiene que ver con disciplinar a los aliados y que todos muestren que están comprometidos. Porque aunque España presupueste un 5%, sería casi imposible gastarlo".

El déficit público ronda el 3% del PIB y el margen para elevarlo es escaso

Aunque España presupuestase un 5% del PIB, sería casi imposible gastarlo

Los españoles pagaría más impuestos para reforzar la sanidad, pero no para defensa

Los contribuyentes quieren que se invierta más en servicios públicos básicos

Así lo indica un sondeo del Instituto de Estudios Fiscales

PABLO SEMPERE MADRID

Los españoles están dispuestos a pagar más impuestos, pero con condiciones. Lo harían para mejorar la sanidad pública, reforzar la educación o sostener el sistema de pensiones, pero no para aumentar el gasto en defensa. Esa es una de las conclusiones del informe *Opiniones y actitudes fiscales de los españoles* en 2024, elaborado por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), que recoge cada año el pulso ciudadano sobre impuestos y servicios públicos.

En plena ofensiva de Estados Unidos y la OTAN para subir el presupuesto militar –piden a los países miembros alcanzar al menos el 5% del PIB–, la mayoría social en España tiene claro cuáles son los límites: más impuestos, sí, pero solo si estos sirven sostener el Estado del bienestar. El informe, publicado el viernes por el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, se basa en más de 4.000 entrevistas realizadas a finales del año pasado a contribuyentes de diferente perfil, renta y edad.

Las respuestas muestran una elevada disposición a aumentar la contribución o esfuerzo fiscal si ello garantiza mejoras en los servicios públicos básicos y en la investigación y el desarrollo (un 76% y 67%, respectivamente). En un segundo escalón estarían las prestaciones sociales y las infraestructuras públicas (57% y 54%, respectivamente). Y en último lugar, ya por debajo del 50%,



Una manifestación por la sanidad pública y contra la política sanitaria del Gobierno de Madrid, el pasado mayo. EP

se situarían la defensa nacional y la protección ciudadana, por un lado, y la transformación digital y verde de las empresas, por otro. Solo un 43% y un 27% de los encuestados, respectivamente, estarían dispuestos a pagar más impuestos a cambio de mejorar estas partidas.

El Gobierno, en línea con esta aparente percepción mayoritaria de la población, ha pactado con la OTAN que el presupuesto en defensa no superará el 2,1% del PIB. Elevarlo hasta el 5% de aquí a 2035, dijeron desde el Ejecutivo el jueves, es "incompatible con nuestro Estado del bienestar y nuestra visión del mundo". Esta meta, para España, supondrá aumentar el gasto en unos 80.000 millones de euros al año, casi la mitad de lo que supone la factura de las pensiones. Organismos como la Autoridad Fiscal han advertido recientemente que ello obligaría a España a endeudarse o a recortar en otras partidas presupuestarias.

La encuesta del IEF ofrece otras formas de aproximarse al fenómeno. Cuando

el instituto de Hacienda, "analizar la diferencia entre la percepción ciudadana sobre el destino efectivo de los impuestos y sus preferencias respecto al uso que debería darse a dichos recursos públicos". Esta comparación permite identificar en qué medida los contribuyentes consideran que los fondos recaudados se están utilizando de acuerdo con sus prioridades en términos de bienes, servicios y prestaciones.

El informe destaca que hay una brecha importante entre lo que los ciudadanos creen que se hace con sus impuestos y lo que les gustaría que se hiciera. La mayor discrepancia está en investigación y desarrollo, donde la gente quería que se invirtiera mucho más de lo que perciben. También hay una discrepancia notable en servicios públicos. En cambio, en defensa y en inversión para las empresas, la diferencia entre el gasto que se percibe y el que se desea es muy pequeña, lo que indica poco interés en que se aumente su financiación. Según el IEF, los ciudadanos priorizan claramente que los impuestos se dediquen a servicios públicos básicos (con una nota media de 3,5 sobre 4), mientras que la defensa y la transformación digital son las partidas menos deseadas, con 2,9 y 2,6 puntos respectivamente.

A pesar de las críticas a una parte del sistema tributario, existe un consenso amplio sobre la utilidad de los impuestos. El 83% de la ciudadanía está muy o bastante de acuerdo con que Hacienda desempeña una función necesaria para la sociedad, un apoyo que no ha bajado del 80% desde 1997. Sin embargo, esta aceptación se matiza por la percepción de injusticia en el reparto de la carga. El 83% de los encuestados consideran que las rentas bajas y medias soportan más presión fiscal que las rentas altas y las grandes empresas.